

El cambio climático está aquí. La duda no es si el comportamiento humano contribuye a él o no, sino hasta qué punto los daños provocados son graves e irreversibles. Sin embargo, teniendo en cuenta la conciencia pública existente — y la atención política a las cuestiones del cambio climático y la necesidad de mitigación —, me inclino a creer que existe todavía esperanza.

El cambio climático es, con gran diferencia, el mayor desafío ambiental con que se enfrenta el mundo, pero todavía es posible hacerle frente. Desde la perspectiva de una Ministra de Hacienda de Noruega las políticas presentan un doble frente. Tenemos una larga y positiva experiencia de impuestos verdes que modifican el consumo nacional en forma más ecológica y ofrece incentivos a la innovación tecnológica. No obstante, el cambio climático requiere una respuesta internacional fuerte, coherente y sostenible. Necesitamos un sólido plan de emisiones internacionales. Lo intentamos en cierta manera en las conversaciones sobre el clima de Bali, en diciembre. Continuaré insistiendo en estos temas.

En Noruega se han introducido impuestos con el fin de reducir las emisiones ecológicamente nocivas en el aire y en el agua, y para recortar el volumen de desechos generados. El primer impuesto con objetivo expresamente ambiental gravó el azufre del aceite mineral en 1971, y fuimos uno de los primeros países en introducir un impuesto sobre el CO₂. Hoy tenemos impuestos ambientales que gravan las emisiones de gases de efecto invernadero, el azufre, el NOx, el tratamiento final de los desechos, los productos químicos nocivos para el medio ambiente y la salud y los envases de las bebidas, y algunos otros impuestos son diferenciales de acuerdo con normas ambientales. Ello ha contribuido tanto a la reducción de las emisiones como al desarrollo de nueva tecnología.

El presente Gobierno ha introducido algunos nuevos impuestos verdes. Continuaremos este ajuste fiscal y compensaremos los ingresos resultantes de aumentos en los impuestos ambientales reduciendo otros impuestos directos e indirectos. En Noruega, el 5,5% de los impuestos percibidos por el gobierno central corresponde a impuestos ambientales y relacionados con la energía — el equivalente del 1,5% del PIB en 2007, uno de los más altos de los países de la OCDE. Por este medio, podemos mantener un alto nivel de bienestar, sin aumentar otros impuestos. El principal objetivo es, y será siempre, reducir el consumo y la producción ambientalmente nocivos. No obstante, no representa ningún inconveniente que permitan elevar los ingresos, además de mejorar el medio ambiente.

En calidad de Ministra de Hacienda coordino también la labor del Gobierno en el frente del desarrollo sostenible. El cuidado de nuestros recursos comunes no está en contradicción con el desarrollo económico y social sostenido; es más bien un requisito previo. La mitigación, con inclusión de sus costos y consecuencias para la economía, debe matizar todas las decisiones políticas.

Noruega es firme partidaria del principio “el que contamina, paga”. Con instrumentos de política económica, como los impuestos verdes y los permisos de emisión, conseguimos que la contaminación resulte costosa y que las reducciones de emisiones sean económicamente deseables. Más del 75% de nuestras emisiones nacionales están reguladas mediante impuestos o permisos. Un impuesto funciona como un precio aplicado a las emisiones y ofrece al contaminador un incentivo para reducir las emisiones siempre que los costos de reducción sean más bajos. Por ello, las reducciones se hacen en la forma menos costosa posible, y se crean incentivos para conseguir las cuando el costo para la economía es mínimo, lo que nos permite conseguir los máximos resultados con los recursos disponibles. Por ello, las políticas eficaces en función de los costos ofrecen a los países un margen para asumir compromisos internacionales más ambiciosos.

Un sistema de negociación de permisos funciona de manera semejante, pero en este caso el precio se determina en un mercado. Quienes pueden reducir las emisiones con costos relativamente bajos lo hacen, y venden los permisos siempre que el precio de mercado sea superior a esos costos. A la inversa, los emisores que tienen considerables costos de mitigación compran los permisos siempre que el precio de mercado esté por debajo del precio de las reducciones. Aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Noruega se incluyen en este sistema.

Un sistema eficiente requiere la asignación de créditos para ofrecer incentivos a la reducción de las emisiones. Ello ocurre cuando el volumen total de los permisos se encuentra suficientemente por debajo del nivel corriente de emisiones. En Noruega



los permisos se otorgan de manera que representen un 20% menos del total de las emisiones de entidades reguladas en el marco del sistema. Sólo el 30% de los créditos se otorgarán en forma gratuita. Ello contribuirá a la subida de los precios y a una reducción real de las emisiones.

Los mercados del carbono son instrumentos clave para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en forma eficaz en función de los costos, por lo que me complace observar que el número de sistemas de intercambio de permisos y su cobertura están aumentando.

Estamos convencidos de que el sistema de comercio de emisiones de la UE podría ser un excelente punto de partida para un mecanismo mundial, y deseamos participar en el esfuerzo para ampliarlo a fin de abarcar más países y más sectores. La esencia

Contamina, paga

por Kristin Halvorsen

de un sistema internacional de permisos negociables consiste, fundamentalmente, en ofrecer a todos los países el mismo incentivo a reducir las emisiones. Luego, cada país trasladará los costos de la reducción a los emisores nacionales. Por ese procedimiento, tanto los productores como quienes consuman sus productos se verán alentados a contribuir a reducir las emisiones. Un precio mundial de mercado de las emisiones de gases de efecto invernadero inducirá a los países, empresas e individuos a invertir en activos con baja concentración de carbono y llevará al mundo por un camino más sostenible.

Un sistema mundial de cuotas nacionales equitativamente distribuidas generará una demanda de permisos de los países desarrollados y, de esta manera, permitirá transferir recursos de los países más ricos a las economías emergentes y países en desarrollo. Éstos tienen derecho al desarrollo, y habría que ofrecerles fuertes

incentivos y recompensas tentadoras para que opten por un crecimiento inocuo para el clima. Este régimen generará más mitigación por dólar y considerables transferencias de recursos hacia los países en desarrollo, que se utilizarán para medidas de adaptación, reforestación e inversiones en tecnología sostenible.

Un sistema internacional de permisos que funcione satisfactoriamente ofrecerá al sector privado de todo el mundo incentivos convincentes y necesarios para recortar las emisiones. El mundo empresarial sabe que un tope más estricto para las emisiones de gases de efecto invernadero dará lugar a una subida del precio de los permisos. Por ello, las expectativas de subida de costos asociados a las emisiones influirán inmediatamente en las decisiones de las empresas. Para que ello tenga la máxima repercusión posible, es indispensable que todos consideren lo antes posible que un acuerdo mundial eficaz constituye una solución creíble a largo plazo. 